

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE :EDUARDO LEÓN ALZATE BOTERO
DEMANDADO :PROTECCIÓN S.A
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
ANTIOQUIA (litis consorcio necesario)
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-008-2019-00697-01
RADICADO INTERNO : 325-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO : 366

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Pretende el señor EDUARDO LEON ALZATE BOTERO se declare que el dictamen de pérdida de capacidad laboral 2017- 71613215 proferido por Savia Salud EPS el 23 de octubre 2017 se encuentra en firme. Por ende, se le reconozca y pague la pensión de invalidez desde el 16 de septiembre 2004 o en su defecto desde la última cotización por reunir los requisitos del parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1ro de la ley 860 de 2003, junto con las mesadas adicionales indexadas, los intereses moratorios y condena en costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones señala que el señor Alzate Botero se encuentra afiliado a la EPS savia salud y al fondo de pensiones administrado

por PROTECCIÓN SA. Que en el mes de enero 2017 se solicitó a savia salud concepto médico de favorabilidad y/o rehabilitación con el fin de iniciar trámites de calificación de pérdida de capacidad laboral. Dicha entidad en lugar de emitir concepto médico dispuso realizar calificación de pérdida de capacidad laboral del señor Alzate Botero. En este dictamen se presentó una PCL del 51.75% de origen común y con fecha de estructuración del 16 de septiembre de 2004. Se envió solicitud para que le fuera notificado el dictamen a PROTECCION SA., quien a través de escrito presentado el 26 de diciembre 2017 presentó recurso de apelación frente a Savia Salud EPS, quien a su vez respondió que se debe acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (JRCIA). Agrega que han transcurrido dos años desde la calificación de pérdida de capacidad laboral de Savia Salud y Protección no le ha dado trámite al recurso de apelación, a pesar de cumplir el actor con los requisitos de superar el 75% de las semanas mínimas para la pensión de vejez y 31.58 semanas fueron cotizadas en los tres años anteriores a la estructura de la invalidez. Que el 15 de abril 2019 se presentó escrito ante Protección para el reconocimiento de la pensión, quien a través del comunicado del 27 de mayo del 2019 indica que la calificación del demandante se encuentra en trámite, por eso no ha sido posible obtener la calificación de pérdida por negligencia del fondo y la EPS (PDF 02)

RESPUESTA A LA DEMANDA

En la contestación de la demanda de PROTECCIÓN SA señala que el señor Eduardo León Alzate Botero se encuentra afiliado a esa entidad desde el 19 de agosto de 1997. Igualmente, que este señor presenta afiliación al subsistema de salud a través de la EPS Savia Salud. Que es cierto que dicha EPS determinó en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral de señor Alzate Botero y calificó el grado de invalidez y el origen de las contingencias tal como se desprende del dictamen 2017- 7163215 del 23 de octubre 2017 que arrojó como resultado una PCL de 51.75% de origen común y con una fecha de estructuración del 16 de septiembre 2004. El dictamen fue recurrido por Protección ante la Junta Regional de calificación de invalidez de Antioquia en el mes de diciembre de 2017. Señala que no es cierto que el recurso de apelación interpuesto por Protección en contra del dictamen emitido por Savia Salud EPS no haya sido remitido ante la JRCIA, quien emitió una nueva calificación en la que determinó que el señor Alzate Botero presenta una pérdida de capacidad laboral del 12.50% de origen común y con fecha de estructuración del 18 de marzo 2020. Lo demás no le consta. Se opone a las

pretensiones de la demanda y propone como excepción la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción (PDF 04 folio 1 a 21).

LA JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA llamada como litisconsorcio necesario por pasiva, responde a la demanda señalando a los hechos que no le constan ninguno de ellos con excepción de la calificación realizada por ella, porque Protección S.A. interpuso el recurso de apelación respecto del dictamen emitido por Savia Salud EPS. Que el 30 de diciembre 2019 la EPS Savia Salud mediante escrito hace solicitud de calificación ante la JRCIA, respecto del recurso de apelación interpuesto por la AFP protección, solicitud que se hizo en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado tercero civil municipal de oralidad, radicando la historia clínica para la calificación y la constancia de pago de los honorarios entre otros documentos. Acto seguido la junta regional emite dictamen 086517- 2019 del 18 de marzo 2020 arrojando una PCL del 12.50% de origen común y una fecha de estructuración del 18 de marzo 2020.

Se abstiene de pronunciarse respecto a las pretensiones propuestas toda vez que van dirigidas al reconocimiento y pago de unas prestaciones a los cuales de ser procedente están a cargo de la AFP demandada. Propone como excepciones: el dictamen de la JRCIA es plenamente válido. La determinación de la pérdida de capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho específicamente al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar y ausencia de causa para pedir.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 10 de octubre de 2023, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIO a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor EDUARDO LEÓN ALZATE BOTERO, se DECLARA probada la excepción denominada inexistencia de la obligación, propuesta por las codemandadas, AFP PROTECCIÓN S.A. y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, quedando implícitamente resueltas las demás. CONDENA en COSTAS a la parte demandante y en agencias en derecho por valor de \$1.160.000, a cargo de la parte demandante y a favor de las codemandadas a prorrata.

El proceso llega en el grado jurisdiccional de consulta

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante indica que la presente demanda se encuentra orientada establecer la declaratoria en firme del dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por SAVIA SALUD e identificado con número. 2017-71613215 del 23 de octubre del 2017 y en consecuencia de ello se reconozca y pague a mi mandante la respectiva pensión de invalidez.

Indica que la parte demandante fue calificada y valorada con un porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral, adicionando a su vez el cumplimiento del requisito de las semanas mínimas que deben ser cotizadas conforme a la pretensión incoadas, fue valorado por una entidad legítimamente autorizada para emitir este tipo de dictámenes dicho porcentaje considera que se encuentra en firme teniendo en cuenta que se realizó para el año 2017, reiterando que se realizaron varias gestiones y notificaciones frente a la hoy codemandada PROTECCIÓN S.A., misma que se encontró debidamente notificada del dictamen objeto de la litis. Y que no obstante lo anterior, se interviene solo 3 años después para proceder con un nuevo dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Antioquia.

Por lo anterior considera pertinente destacar en el presente traslado la firmeza y ejecutoria previa del dictamen proferido por la EPS SAVIA SALUD ello en virtud de un lapso de tiempo transcurrido entre ambas valoraciones aun teniendo presente que se encontraba la entidad apelante del documento notificada y enterada con mucha antelación; entendiéndose que el paso del tiempo opera para todos los ciudadanos y entidades, lo anterior motivado en que aun teniendo conocimiento de ello, la entidad no realizo las gestiones pertinentes y legales para que se llevara a cabo o se diera trámite al recurso que consideraba ante la junta.

Que debe tenerse presente a su vez, que la demanda fue presentada después de haberse realizado una reclamación administrativa ante la entidad demandada, esto es PROTECCIÓN S.A. e incluso de manera previa a que la Junta Regional realizara la valoración con la cual se pretende sustituir el dictamen número 2017-71613215 del 23 de octubre del 2017. Cuando de

hecho ya se habían realizado actuaciones de notificación y citaciones a las codemandadas.

Que el dictamen por parte de la JRCA fue realizado para el mes de marzo de 2020 cuando ya la jurisdicción ordinaria laboral y para la fecha se encontraba en firme la valoración realizada por SAVIA SALUD, en virtud de lo anterior me remito al decreto 1352 del 2013 establece trámites y consecuencias para efectos de adelantar los recursos y calificaciones, y solo transcurridos tres (3) años la entidad PROTECCIÓN S.A., ejerció facultad para el pago de honorarios, posterior a requerimientos tales como peticiones, tutelas y desacatos solicitando dar trámite oportuno, y solo hasta posterior a la ejecutoria y firmeza del dictamen procedió a dar continuidad al mismo.

Resalta que una vez admitida la demanda se acredita una pérdida de competencia por parte de las entidades evaluadoras en la continuidad y adelanto del trámite de calificación, a su vez, manifestando que el dictamen no reúne los requisitos, pues no se realizó una valoración multidisciplinaria, y sumado a ello entendiéndose que dicho dictamen de la JRCA tampoco fue notificado en debida forma al señor EDUARDO LEON ALZATE, realizando la valoración de calificación bajo parámetros diferentes con ocasión al desarrollo de la pandemia. Ello reuniendo características propias que deberán evaluarse y derivando en que se trata de un dictamen que incurre en faltas que son taxativamente necesarias para la legalidad y practicidad de la pérdida de capacidad laboral dirimida y hoy controversial.

Por su parte Protección S.A indica que la sentencia emitida por el Juzgado de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, y no existe probabilidad alguna de éxito respecto de las pretensiones formuladas por el demandante, por lo que solicita se mantenga en firme la decisión que absolvió a la demandada teniendo en cuenta para ello las siguientes consideraciones:

El problema jurídico para resolver en el presente litigio se circunscribe en determinar, si al señor Eduardo León Alzate Botero, le asiste derecho a que se le reconozca y pague de la pensión de invalidez, con fundamento en el dictamen No 2017-71613215, emitido en primera oportunidad por la Entidad Promotora de SAVIA SALUD en fecha octubre 23 de 2017. Que para el aso bajo estudio no se satisface, el requisito del artículo 38 de la ley 100 de 1993 si se tiene presente que el citado señor fue calificado en dos ocasiones. En primera oportunidad, por la EPS Savia Salud, entidad que expidió dictamen de

pérdida de capacidad laboral No 2017-71613215 del 23 de octubre de 2017, el cual arrojó un porcentaje de merma de la capacidad laboral del 51.75%, con fecha de estructuración septiembre 16 de 2004 y de origen común.

Por no compartir el dictamen emitido por la Entidad Promotora de Salud, Protección S.A. presentó manifestación de inconformidad, conociendo en consecuencia, la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia, quien dictaminó un porcentaje de PCL 12.50%, de origen común y con fecha de estructuración del 18 de marzo de 2020, conforme se evidencia del dictamen No 086517-2019 que reposa en el expediente; dictamen que goza de firmeza, al no haber sido recurrido por la parte actora.

Que, en la sustentación del dictamen, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, llama la atención respecto de las inconsistencias presentadas por la EPS Savia Salud a través de su dictamen No 2017-71613215 de fecha 23 de octubre de 2017 consistentes estas en:

- Califica (2) dos veces el dolor desconociendo que en columna el dolor está incluido.
- El porcentaje se basa en una valoración del año 2012, la cual no refleja el estado actual, no hay concepto de rehabilitación, ni de médicos tratantes de los dos últimos años.
- Las deficiencias están sobrevaloradas al asignar un porcentaje de clase 3 por tabla 15.3 sin haber sido instrumentado, sin tener soporte de compromiso radicular u otro anatómico.
- Califica el dolor crónico somático doble sin aporte de tratamientos recibidos por clínica del dolor.
- Sobrevalora el rol laboral al calificarlo con el máximo valor.

Por lo expuesto y al no ostentar la calidad de invalido el señor Eduardo León Alzate Botero en los términos anotados, Protección S.A. no se encuentra obligada bajo ningún concepto a reconocer y pagar la prestación económica, pensión de invalidez, pretendida por el actor en el presente proceso.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar en virtud del grado jurisdiccional de consulta, si hay lugar a revocar la sentencia que negó el reconocimiento de

la pensión de invalidez del demandante y le dio validez al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

La señora juez en una sentencia muy parca y absolutoria señala que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia es la entidad autorizada para determinar la PCL, el origen y la fecha de estructuración y que al determinar la PCL del 12.50% de origen común y una fecha de estructuración del 18 de marzo 2020, no se cumple con el porcentaje del PCL que es del 50%, saliendo avante la inexistencia de la obligación.

Son hechos demostrados a través de la documental específicamente en el PDF 02. De folio 31, la solicitud de vinculación al fondo de pensiones Protección S.A. de fecha 18 de agosto de 1997. Historia laboral de protección con fecha de 17 de enero 2017 en donde aparece un total de 903.86 semanas folio 69 a 74 e igualmente historia laboral de Colpensiones del 10 de abril de 2019 folio 76 a 80.

Dictamen de la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia (folio 11 a 17). Historia administrativa de lo acaecido, incluido derechos de petición y derechos de tutela folio 26.

Pues bien, pretende el demandante se reconozca y pague la pensión de invalidez desde el 16 de septiembre 2004 o en su defecto desde la última cotización, por reunir los requisitos del parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1ro de la ley 860 de 2003

El artículo 39 de la ley 100 de 1993 establece lo siguiente:

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,

PARÁGRAFO 1o. ...

PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.

Por lo anterior como primer requisito se requiere estar invalido, es decir, que tenga 50% o más de pérdida de capacidad laboral, al tenor de lo expuesto por el artículo 38 de la ley 100 de 1993 y el segundo aspecto que el actor haya cotizado en su vida laboral 975 semanas de 1.300, para que sea válido haber cotizado 25 semanas anteriores en los últimos 3 años.

1. Determinación de la invalidez.

En dictamen emitido por Savia salud EPS N° 2017- 71613215 se determina el total de deficiencia combinada 20.25%, el rol laboral 29 y total otras áreas ocupacionales 2.5% para un total de pérdida de capacidad laboral y ocupacional de 51.75% con fecha de estructuración el 16 de septiembre 2004. Los diagnósticos revisados fueron el lumbago no especificado, trastornos de discos intervertebrales no especificados, lesión de segmentos móviles de la columna lumbar. (PDF 07 fls 19 a 25)

En el dictamen de la JRCIA, revisa la historia clínica obrando para el 17 de diciembre de 2002 obra que estando el Sr. Eduardo León Alzate Botero seleccionando madera sintió un dolor en la espalda, consulto al médico, incapacidad 1 día, luego 3 meses, posteriormente le realizaron electro diagnóstico que concluyó estudios sugestivos de patología radicular izquierda. Así mismo que el 10 de julio de 2002 se hizo un TAC simple de columna lumbosacra reportándose concluyéndose: abordamiento discal en el espacio intervertebral C5 S1 protusión discal L3 L4 y L4-L5, RNM encentra cambios osteocondrosicos degenerativos de la columna dorsal baja y enfermedad discogénica degenerativa L5-S1 con extensión a la zona lumbar derecha sin repercusión radicular. En consulta del 9/2005 manifestó lumbalgia y que no era la primera vez de esa sintomatología. En conclusión, la enfermedad actual lumbalgia degenerativa, de origen común basada en antecedentes de sintomatología similar, hallazgos de resonancia magnética, la descripción del mecanismo que se reportó en el presunto accidente de trabajo por posición inadecuada. Se debe intervenir quirúrgicamente.

La Sala observa la misma conclusión puede sacarse de las revisiones de Saludcoop EPS, del instituto del tórax en Rx de columna lumbosacra, al igual que del instituto neurológico de Antioquia. (PDF 07 fls. 60 a 91) Obsérvese que el 11 de septiembre de 2002 el instituto neurológico encuentra hernia de columna con pérdida de la fuerza miembros inferiores, conclusión: estudio

sugestivo de patología radicular L4 izquierda dolor lumbar irradiado a miembros inferiores principalmente en el izquierdo de 4 años de evolución, tratamientos fisioterapia y analgésicos, incapacidades prolongadas ha perdido trabajo por esta causa. Paciente con limitación funcional y restricción para todas las actividades se inicia manejo para definir secuelas. conclusión cambios osteocondrásicos degenerativos de la columna dorsal

La JRCIA al hacerle el examen el día de la revisión deja constancia de: “Valoraciones: buenas condiciones generales, bien presentado, **no hay déficit neurológico en las cuatro extremidades solo acortamiento de isquiotibiales, no hay otras patologías asociadas.**” señala que “de conformidad con los diagnósticos consignados en la historia, los paraclínicos y de laboratorio constatados en la valoración médica **se encuentra deficiencia en los sistemas columna lumbar de carácter leve, el dolor se encuentra incluido en este capítulo**”: Concluye que savia salud presentó error grave en los siguientes puntos:

- Calificó dos veces el dolor, desconociendo que, en columna, el dolor está incluido.
- El porcentaje se basa en una valoración del año 2012 la cual no refleja el estado actual, no hay concepto de rehabilitación y de médicos tratantes de los dos últimos años.
- Las deficiencias están sobrevaloradas al asignar un porcentaje de clase 3 por tabla 15.3 sin haber sido instrumentado, sin tener soporte de compromiso radicular u otro anatómico.
- Califica dolor crónico somático doble sin aporte de tratamiento recibidos por clínica del dolor
- Sobrevalora el rol laboral al calificarlo con el máximo valor su valor es de 5% por tener adaptaciones laborales.

Por lo anterior, el fundamento para la calificación fue; diagnóstico lumbago no especificado por enfermedad común, trastornos de los discos intervertebrales no especificados por enfermedad común lo que da de deficiencia ponderada es un 3.5%, el rol laboral 8% y otras calificaciones en áreas ocupacionales del 9% para un total de 12.50%. Origen accidente, riesgo común y fecha de estructuración 18 de marzo 2020 (PDF 07 fls 98 a 105)

Observa la sala que se utiliza de manera adecuada los parámetros del manual único de calificación de invalidez (decreto 1507 de 2014) específicamente el

capítulo XV que trata de las deficiencias por alteraciones de la columna y la pelvis y específicamente que se refiere a la calificación de las deficiencias de la columna lumbar (tabla 15.3) observándose los errores enrostrados al dictamen de savia salud EPS, después de la valoración con base en los fundamentos de hecho (conceptos médicos más actualizados, exámenes clínicos y de imagenología).

Además de lo anterior observa la Corporación que el accionante basa sus fundamentos de hecho en interpretaciones personales mas no en razones y fundamentos técnicos, es decir no ataca las posibles falencias del dictamen de la JRCIA, sino que se apega a lo dicho por Savia salud EPS, cuando en estos procesos se debe analizar las tablas específicas utilizados por los médico que realiza el dictamen y como las justificaron, las evidencias médicas visibles en la historia clínica y en el diagnostico presencial del individuo, para que de manera objetiva se pretenda la nulidad del dictamen posterior que le era contrario.

En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la parte demandante de que se tenga en cuenta, el dictamen de pérdida de la capacidad laboral de Savia Salud EPS, bajo el entendido que, al no haberse decretado la nulidad del dictamen de la JRCIA, el mismo se encuentra en firme.

Por lo anterior se confirmará la decisión de la A quo, en cuanto a que la PCL mayor al 50% de la demandante, ocurrió después de la muerte del Sr Juan de la Cruz Holguín Vásquez.

Lo anterior no obsta para que a futuro el demandante pueda volver a solicitar una nueva calificación por invalidez, si sus padecimientos empeoran.

En cuanto al segundo elemento, relativo a tener derecho a la pensión de vejez el actor haya cotizado en su vida laboral 975 semanas de 1.300, para que sea válido haber cotizado 25 semanas anteriores en los últimos 3 años, debe señalarse que a pesar de tener 903.86 semanas, al no tener una PCL superior al 50% no tendría derecho a que se le aplique el parágrafo 2 del artículo 1 de La ley 806 de 2003 y menos cuando se determinó la fecha de estructuración el 18 de marzo de 2020.

Sin costas por conocerse en el grado jurisdiccional de consulta.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, que ABSOLVIO a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor EDUARDO LEÓN ALZATE BOTERO, por lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin Costas en segunda instancia

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE :EDUARDO LEÓN ALZATE BOTERO
DEMANDADO :PROTECCIÓN S.A
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE
ANTIOQUIA (litis consorcio necesario)
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-008-2019-00697-01
RADICADO INTERNO : 325-23
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de diciembre de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO